



## DEL «AÑO CLAVE» AL «AÑO DECISIVO»: LAS RELACIONES HISPANO-CHILENAS DURANTE LA PRIMERA LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ, 1982-1986

*Pedro Feria Vázquez*

Universidad Austral de Chile

pedro.feria@uach.cl

Id-ORCID: 0000-0001-6112-8890

Las relaciones hispano-chilenas durante el siglo XX han sido profusamente estudiadas, no solo por los obvios lazos culturales entre los dos países, sino también por las similares experiencias históricas vividas en ese periodo. Desde los efectos que la guerra civil española tuvo en el país andino, pasando por la diplomacia durante la dictadura franquista, hasta la conmoción que el golpe de Estado chileno de 1973 produjo en la opinión pública española y las comparativas entre ambas transiciones a la democracia, los trabajos sobre los nexos históricos entre España y Chile han sido abundantes, desde los ya clásicos de Carlos Huneeus,<sup>1</sup> Juan José Linz<sup>2</sup> y O'Donnell, Schmitter y Whitehead<sup>3</sup> pasando por los de María José Henríquez,<sup>4</sup> Isabel Jara,<sup>5</sup> Carlos Waisman,<sup>6</sup> Encarnación Lemus,<sup>7</sup> Marcelo Lasagna<sup>8</sup> y Álvaro Soto Carmona,<sup>9</sup> hasta los más recientes de Patricio Ruiz Godoy,<sup>10</sup> Cristina Luz García Gutiérrez,<sup>11</sup> Juan Luis Carrellán<sup>12</sup> y Héctor Opazo.<sup>13</sup>

Dentro de este campo de estudios comparado, el año 1982 supone un punto de inflexión importante para los dos países, puesto que en él van a suceder dos acontecimientos de alcance. Por un lado, en ese «año clave», según definición de Eduardo Sotillos,<sup>14</sup> se produjo la victoria electoral del PSOE con una amplia mayoría absoluta, que convertiría a Felipe González en presidente del gobierno, simbolizando de

esta forma que la democracia española se había consolidado, dando fin al periodo de transición. Por otro, en Chile estalla una grave crisis económica con graves consecuencias sociales que se tradujeron en importantes movilizaciones contra la dictadura a partir del año siguiente.

Como vemos, mientras en España comenzaba su andadura un gobierno cuyas principales líneas de actuación serían profundizar la democracia y expandir el estado de bienestar, en el país andino hacía casi una década que se había establecido un régimen militar que estaba llevando a cabo una política económica fuertemente neoliberal. Vistas las enormes distancias ideológicas entre ambos gobiernos, era lógico esperar un enrarecimiento de las relaciones entre España y Chile. Estas, que habían sido buenas durante el franquismo, comenzaron a enfriarse cuando tras la muerte del dictador en 1975 la nueva España democrática pretendía alejarse del pasado autoritario para integrarse en Europa, y llegaron casi a la ruptura cuando a partir de 1982 el gobierno socialista comienza a apoyar a la oposición chilena.

Autores como Whitehead<sup>15</sup> han señalado que en las democracias modernas existen dos diplomacias «paralelas»: por un lado, las relaciones institucionales protagonizadas por los gobiernos, y por otro, las relaciones entre las sociedades civiles de los distintos países, cada





una con sus propias herramientas. De esta forma, mientras las relaciones diplomáticas oficiales alcanzaban el punto más bajo, los contactos entre las sociedades civiles española y chilena crecían exponencialmente. Era evidente que la situación de Chile era un tema sensible para la opinión pública española, por los mencionados lazos culturales y las experiencias comunes vividas. Los medios de comunicación españoles informaban profusamente sobre lo que sucedía en el país, y desde la recuperación de la democracia en 1977, partidos políticos, sindicatos, ONG's y otros grupos de la sociedad civil protagonizaron una intensa corriente de solidaridad hacia los demócratas chilenos. Durante los gobiernos socialistas, ningún cargo público chileno fue recibido en España de manera oficial; todo lo contrario ocurrió con las figuras de la oposición, a las que no había problema en recibir en La Moncloa, en lo que se podría considerar una suerte de «diplomacia opositora».<sup>16</sup>

El año 1986 supondría otro hito importante para los dos países. En España tuvo lugar el ansiado ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), y a partir de entonces el país se convertirá en interlocutor privilegiado entre Europa y Latinoamérica. Además, las elecciones generales celebradas en junio revalidaron la mayoría absoluta de Felipe González y vinieron a cerrar una muy intensa primera legislatura socialista. Al otro lado del océano, la oposición chilena lo había proclamado el «año decisivo», en el que, a través de grandes movilizaciones ciudadanas, se esperaba una rápida caída de la dictadura, que finalmente no se produjo, lo que obligaría a todos a recalibrar sus estrategias.

En el presente artículo vamos a explorar las relaciones hispano-chilenas durante esa primera legislatura socialista, en sus relaciones diplomáticas «oficiales», pero sobre todo en los vínculos a nivel de sociedad civil, que han sido mucho menos estudiados que las primeras, aun-

que poseen gran variedad y riqueza y pueden, llegado el caso, influir e incluso reorientar las relaciones diplomáticas entre los países. Para ello nos serviremos de la bibliografía publicada, tanto monografías como memorias personales de los protagonistas de los hechos, así como de fuentes primarias. Consultaremos la prensa, como los diarios de tirada nacional *El País*, *ABC* y *La Vanguardia*. En cuanto a las fuentes archivísticas, nos serán de gran ayuda los fondos conservados en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias (AFPI). En este organismo, vinculado al PSOE, se encuentra depositada la documentación proveniente de la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, fundamental para entender la política de los gobiernos socialistas hacia Chile durante los años ochenta, y entre ella se encuentran correspondencia con miembros de la oposición chilena, convocatorias, proyectos de cooperación, etc. También se conservan informes sobre la situación interna chilena que suponen un interesante aporte al conocimiento de la situación del país durante los años de la Junta Militar.

### Exportando democracia

Superadas las incertidumbres de los años anteriores y con una democracia consolidándose, a mediados de los ochenta España se sentía con la autoestima suficiente para denunciar situaciones injustas que ocurrían en el extranjero<sup>17</sup> y, a su vez, para empezar a ofrecerse como ejemplo para otros países que en esos momentos atravesaban por situaciones parecidas a la que ella misma vivió en los setenta. La sociedad española, que estaba viviendo un acelerado proceso de modernización, se sentía orgullosa del éxito de la transición a la democracia, e indignada por las violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica, con quienes la unían, como decíamos, lazos culturales y experiencias históricas comunes, por lo que no tardó en





protestar; de esta forma, para autores como Cristina Luz Gutiérrez, las manifestaciones en contra de las dictaduras latinoamericanas durante los ochenta «deben leerse como un paso más en la maduración política de la sociedad española».<sup>18</sup>

Por su parte, el nuevo gobierno salido de las elecciones de 1982 deseaba reforzar las relaciones políticas y económicas con Iberoamérica, que González consideraba «área natural» de España. El discurso de los derechos humanos y la democracia se convertiría en el eje de esta política y, enmarcada en él, se exportó la idea de la «transición modélica» española.<sup>19</sup> En este contexto, comenzarán a realizarse numerosos actos públicos, en los que políticos y especialistas resaltaron el éxito de la transición española, y cómo esta era un modelo exportable a otros países; así, en mayo de 1983 se celebró en Madrid el simposio «Caminos de la Democracia en América Latina», en el que Luis Yáñez, presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), afirmó que «España puede y debe prestar el apoyo que se pida para el retorno de la democracia en Latinoamérica».<sup>20</sup>

Desde muy pronto varios de los protagonistas de la reciente transición española viajarán a Latinoamérica para contar sus experiencias, siendo casi siempre bien recibidos, pues en varios países de la zona el modelo español comenzaba a ser visto como una posible vía hacia la democracia, entre ellos Chile. Durante los años siguientes una larga nómina de personalidades españolas visitaría el país andino, donde una y otra vez pondrían la transición española como modelo. A finales de junio de 1983 visitaron Santiago cuatro destacados líderes de dicho proceso: Manuel Gutiérrez Mellado, Comandante del Ejército durante la Transición; José Oneto, director de *Cambio 16*; Elías Díaz, uno de los redactores de la Constitución de 1978, y José María «Txiki» Benegas, diputado del PSOE, quien recordó el ambiente de «consenso» que

caracterizó la experiencia española. En enero de 1984 se celebraría el Ciclo de Conferencias denominadas «España Hoy: su realidad cultural, social y política», con las intervenciones de políticos, académicos y artistas españoles; en octubre de 1985 serían Óscar Alzaga y Juan Carlos Guerra, dirigentes del centrista Partido Demócrata Popular (PDP), quienes acudieron a Santiago, donde Guerra alabó el recientemente firmado Acuerdo Nacional, comparándolo con lo vivido años antes en España.<sup>21</sup>

Ciertamente, desde muy pronto políticos chilenos no solo de la oposición democrática, sino también de sectores aperturistas del pinochetismo, valoraron positivamente la «solución española», por lo que tenía de pacífica y consensuada. La situación política de dicho país a mediados de los ochenta presentaba ciertos paralelismos con la de España diez años atrás: la debilidad y fragmentación de la oposición hizo que no tuviera la fuerza suficiente para provocar la ruptura y ello hiciera inevitable el pacto con las fuerzas aperturistas del régimen, lo que se vino a llamar «ruptura pactada». Según Patricio Ruiz Godoy, el éxito de la transición española la convertía en un poderoso referente que legitimaba las posturas de todos aquellos que en Chile preferían la salida negociada frente a la ruptura radical, y a menudo violenta, con el pasado, como proponían los comunistas y el MIR.<sup>22</sup>

Así, el socialista Erich Schnake reconoció que la experiencia de la «Platajunta» sería muy importante para la transición chilena; su compañero Ricardo Lagos afirmaría que el «modelo europeo» era el más atrayente para Chile.<sup>23</sup> El ejemplo español también fue muy admirado por la Democracia Cristiana, por su carácter de «acuerdo nacional» que integraba a todas las tendencias políticas y sociales, y así, Edgardo Boeninger afirmaría en 1980: «a Chile lo que le hace falta es el equivalente de los pactos de la Moncloa en España». Años después, Alejandro





Silva Bascuñán recordaría «la lección brillante» ofrecida por los españoles, y en 1985 Patricio Aylwin apostaba ya por el modelo español: «¿Por qué no podría, en nuestra patria, seguirse un ejemplo semejante?». <sup>24</sup> También lo admiraron los sectores aperturistas del pinochetismo, y así por ejemplo Mónica Madariaga señaló la inspiración que le supuso el papel de Felipe González en la transición española. <sup>25</sup>

### Las relaciones diplomáticas y económicas

A partir de 1982, Iberoamérica ocupará un lugar relevante en la acción exterior española, aunque no prioritario -la prioridad era la integración en Europa. En este aspecto, la estrategia regional se orientará a otorgar apoyo a los procesos de desarrollo económico y democratización. Más tarde, desde el momento en que entre a formar parte de la CEE, España pasará a considerarse el «puente» entre dicho organismo y Latinoamérica. <sup>26</sup> La celebración en 1992 del V Centenario del Descubrimiento de América, que el gobierno español pretendía que se celebrase «con paz y libertad en todos los países de habla hispana», fue la excusa perfecta para la implementación de estas políticas. <sup>27</sup>

En cuanto al caso chileno, el gobierno español buscaba lograr el aislamiento internacional del régimen, lo que en cierta medida tuvo éxito, haciendo difícil el desenvolvimiento de la política exterior del Gobierno militar. <sup>28</sup> Frente a esto, Pinochet se defenderá enarbolando recurrentemente el argumento de la «no injerencia» en asuntos internos, a lo que el gobierno español responderá admitiendo dicho principio, pero no el de igualdad de trato y de intensidad. <sup>29</sup>

Prueba de la frialdad de las relaciones diplomáticas lo constituye el hecho de que entre 1982 y 1989 no se produjeron visitas oficiales de autoridades chilenas a España ni viceversa. Este trato contrasta, como decíamos, con el ofrecido por el gobierno socialista a las figuras

de la oposición, a las que siempre se recibió abiertamente, en lo que se llamó «diplomacia opositora». Estas relaciones de alguna forma minimizaron los esfuerzos de la Cancillería chilena para sortear la presión internacional e hicieron fracasar sus sucesivos intentos de «lavar» su imagen internacional. <sup>30</sup>

Al frente de la embajada en Chile sería colocado en 1983 un diplomático de gran experiencia, Miguel Solano Aza. En cuanto a la legación chilena en España, tras el perfil duro de Francisco Gorigoitia, primer embajador tras el golpe, la Junta Militar prefirió a partir de entonces enviar personalidades más neutras, generalmente tecnócratas que se dedicaron sobre todo a potenciar las relaciones comerciales. En mayo de 1983 sería nombrado para el puesto Mariano Fontecilla, diplomático de carrera, como lo fue su sucesor Fernando Zegers, quien asumió su cargo en 1984. Este llevaría a cabo una frenética labor de relaciones públicas para tratar de mejorar en la medida de lo posible la imagen de su país entre la opinión pública española, escribiendo numerosas cartas a los periódicos denunciando las «falsedades» y «tergiversaciones» que en ellos se publicaban sobre la situación chilena. <sup>31</sup>

Sin embargo, y a pesar de los roces en el terreno político, en lo que se refiere a las relaciones económicas, de nuevo terminarían primando los intereses creados, <sup>32</sup> y no solo no se interrumpieron durante esta etapa, sino que incluso aumentaron, perfilándose España como un importante cliente y proveedor para Chile. Se exportaba a España principalmente materias primas, mientras que las importaciones chilenas se concentraban en productos manufacturados. <sup>33</sup> Consorcios estatales y empresarios particulares poseían importantes intereses en el país andino; bancos españoles realizaron fuertes inversiones, se firmaron importantes acuerdos en materia pesquera, se facilitó la exportación a España de nitrato y cobre, y se





adjudicaron ambiciosos proyectos industriales, como la Hidroeléctrica de Colbún.

Desde el primer momento, los dos gobiernos mostraron su voluntad de que la política no interfiriera en las relaciones comerciales, y de hecho, en estos años política y economía se convirtieron prácticamente en compartimentos estancos, evitando entremezclarse. Incluso durante el año 1986, el de mayores enfrentamientos diplomáticos entre ambos países, los intercambios comerciales se dispararon, coincidiendo con la salida de Chile de la crisis de la deuda,<sup>34</sup> y empresas estatales españolas como Initec lograron importantes contratos.<sup>35</sup>

El gobierno socialista era consciente del desprestigio que podía granjearle estos tratos con el régimen pinochetista, en un momento en el que la opinión pública española mostraba gran rechazo al mismo, por lo que trató de que se mostrasen lo menos posible a nivel institucional.<sup>36</sup> También se negó a aplicar cualquier tipo de sanciones económicas contra Chile, pues la estabilidad y buena salud de la economía del país resultaban fundamentales de cara a los negocios que se estaban emprendiendo, y que sentaron las bases del denominado «segundo desembarco» de los noventa, por lo que el gobierno español evitó el ataque a Pinochet por esta vía.

#### La ayuda del gobierno y los partidos españoles a la oposición chilena

No deja de ser paradójico que, mientras las relaciones diplomáticas entre ambos países se enrarecían, las sociedades civiles española y chilena y sus organizaciones intensificaron sus lazos de cooperación, dejando ver la existencia de un entramado cada vez más fluido, activo y entretejido.<sup>37</sup>

Una razón de esta permanente corriente de solidaridad tiene que ver con la gran actividad desplegada desde el primer momento por los exiliados chilenos en España, quienes constru-

yeron una excepcional red de apoyo que sería sumamente eficaz,<sup>38</sup> como recuerda Ricardo Lagos: «Estaba claro que nuestra causa había inspirado al público europeo (...) Intentamos aprovechar ese apoyo para aumentar la presión sobre Pinochet».<sup>39</sup> El éxito organizativo del exilio chileno en España puede catalizarse en un memorándum que en octubre de 1986 envió al PSOE la agrupación en España del Partido Radical. En el documento se mencionaban más de una decena de asociaciones chilenas en España, entre grupos estudiantiles, feministas, de defensa de derechos humanos y de ayuda al exiliado, que llevaban a cabo múltiples actividades, como conferencias y tertulias, y convocaban diversas movilizaciones.<sup>40</sup> El porqué de este éxito puede deberse, según varios autores, a la gran similitud del sistema político chileno con los modelos políticos europeos. Esta situación permitió visibilizar más la situación del drama del exilio chileno sobre otros exilios debido a la existencia de partidos hermanos en el Viejo Continente.<sup>41</sup>

En los primeros años, el exilio chileno en España no era muy numeroso, debido a que el país estaba todavía bajo una dictadura, y tras la muerte de Franco la joven democracia española parecía todavía muy débil y los riesgos de involución muy altos.<sup>42</sup> Esta visión comenzó a cambiar cuando a principios de los ochenta la democracia comenzó a asentarse, y sobre todo por el decisivo apoyo que a partir de 1982 el gobierno mostró hacia la democratización de Chile, disparándose el número de andinos radicados en España.<sup>43</sup> Poco a poco, la Península se fue convirtiendo en destino para numerosos dirigentes exiliados: En 1977 llegaría Víctor Manuel Rebolledo, del Partido Radical, y en 1979 su compañero Ricardo Navarrete; en 1978 lo haría el socialista Ricardo Núñez, y en 1980 arribaría el democristiano Andrés Zaldívar. Sin embargo, el líder chileno que más tiempo permaneció en el exilio español, y el que más





contacto mantendría con la política española, fue el socialista Erich Schnake, quien residiría en Madrid entre 1978 y 1987.<sup>44</sup>

Hasta 1977, fecha de su legalización, partidos y sindicatos españoles poco podían hacer para ayudar a sus homólogos chilenos. La clandestinidad a la que se vieron sometidos durante el régimen franquista impedía que desarrollaran una actividad normal, quedando su labor frente al «caso chileno» reducida a la publicación de manifiestos de protesta. Lógicamente, la llegada de la democracia facilitará su trabajo. Tras las primeras elecciones, muchos miembros de partidos de la oposición consiguieron acta de diputado, lo que les proporcionó cobertura legal para sus actuaciones, por ejemplo, para viajar a Chile sin temor a ser detenidos o expulsados, como cuando Felipe González llegó a Santiago en agosto de 1977 para mediar por varios socialistas presos.

Sin embargo, el inicio del propio proceso de transición a la democracia en España hizo que su atención se concentrara en él, pasando los asuntos internacionales a un segundo plano, aunque pudieron realizar numerosos actos de protesta y jornadas de apoyo a la oposición chilena, así como la presentación de diversas mociones parlamentarias para presionar al gobierno de la UCD para que mostrara una mayor contundencia contra la junta militar.<sup>45</sup>

A partir de 1982, con la consolidación de la democracia española y la llegada de los socialistas a la Moncloa, la ayuda a Chile pudo institucionalizarse y ampliarse. Entre otras cosas, mejoró la llegada de información sobre lo que estaba ocurriendo en Chile, sin la cual era prácticamente imposible plantearse políticas factibles. Si antes de 1982 la única información que llegaba a España procedía de los medios de comunicación, de los testimonios que traían exiliados chilenos o los que obtenían españoles que viajaban allá, con todas las limitaciones que ello suponía, a partir de la victoria del PSOE

se podrán nombrar embajadores más acordes con la visión del nuevo gobierno, lo que facilitará mucho la labor. En este aspecto fue importante el trabajo en la agregaduría laboral de la embajada española en Santiago de Enrique Gimeno Casalduero. Desde finales de los setenta había enviado información sobre la situación laboral y sindical chilena a UGT y PSOE, y a partir de 1982 la remitirá directamente al gobierno de González y por lo tanto será una pieza fundamental en la política española con respecto a Chile. Su correspondencia con Elena Flores, la secretaria socialista de Relaciones Internacionales, fue frecuente, y se encuentra recogida en el AFPI.<sup>46</sup>

La ayuda a Chile partió del propio gobierno español (generalmente a través del Instituto de Cooperación Iberoamericana), de comunidades autónomas y ayuntamientos, de partidos, sindicatos, asociaciones civiles y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En lo que se refiere a los partidos políticos, la ayuda partió principalmente de los grupos de izquierdas, principalmente PSOE y PCE (más tarde IU), y en mucha menor medida los partidos de centro y derecha, CDS, PDP y AP. Aunque a la hora de ayudar a la oposición no solían hacerse distinciones, lógicamente cada partido se relacionaba preferentemente con sus contrapartes chilenos.

En el caso del PSOE, llevó a cabo su labor solidaria bien directamente, bien a través de sus fundaciones, como la Pablo Iglesias o Solidaridad Internacional, y sus principales destinatarios fueron los socialistas chilenos y asociaciones vinculadas.<sup>47</sup> Un nexo importante en las relaciones entre el PSOE y las fuerzas políticas opositoras chilenas fue la mencionada Elena Flores, quien mantuvo un contacto directo y fluido con ellas. Según la documentación conservada en el AFPI, desde 1982 se multiplicaron los contactos entre el PSOE y la oposición chilena, sobre todo la vinculada a las





distintas ramas del Partido Socialista, aunque también con el Partido Radical, la Democracia Cristiana, los comunistas y los sindicatos. Sin embargo, y a pesar de que se habló con todos, se desconfiaba de los comunistas y de aquellos colectivos cercanos a ellos, y solía dejarse «en cuarentena» toda petición de apoyo que viniera de estos, como se hizo con la Agrupación de Familiares de Presos políticos. Según un informe, sus delegados se entrevistaron con César Mogo, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, quien finalmente recomendó cautela: «se advierte el soporte del Partido Comunista Chileno a esta organización».<sup>48</sup>

El PSOE también se solidarizó con Chile a través de la Internacional Socialista (IS). Durante los años ochenta, la IS mantuvo permanente atención sobre los sucesos en Chile, donde la organización, y con ella el PSOE y su líder, Felipe González, ocuparon un importante espacio político. Cuando a mediados de la década arrecien las protestas contra el régimen, se constituiría un «Comité Chile» para seguir estrechamente el desarrollo de la situación política en ese país.

Dentro de las actividades del PSOE respecto a Chile, parte importante de sus esfuerzos, como demuestran los múltiples informes y cartas al respecto conservados en el AFPI, se encaminarán a lograr la reunificación del Partido socialista chileno, escindido desde 1979 en varias corrientes, lo que limitaba su efectividad en la lucha contra la dictadura. La mediación de los socialistas españoles fue pedida también por los propios miembros del PSCh, muchos de los cuales estaban exiliados en España, donde fueron muy influenciados por la figura de Felipe González, creían que su modelo era el más exitoso y por ello lo consideraban como el árbitro ideal para conseguir la tan ansiada reunificación.<sup>49</sup> En este caso, la política del PSOE no solo será de mediación entre los distintos grupos, sino también tratar de averiguar cuál

de ellos se adecuaba más a la visión del PSOE, con la idea de potenciarlo. Se pretendía así fomentar las posturas más moderadas y aislar las más radicales y próximas a los comunistas, rechazando el uso de la violencia como medio para hacer caer la dictadura y favoreciendo una transición consensuada según el «modelo español».

También el PCE llevó a cabo numerosas campañas de apoyo a la oposición chilena, aunque debido a su distanciamiento con el Partido Comunista Chileno por el apoyo de estos a la lucha armada, hizo que también se relacionase con un gran espectro de partidos y grupos políticos, como el MIR.<sup>50</sup> La solidaridad del PCE se tradujo en diversas actividades como celebración de reuniones y actos informativos, convocatorias de manifestaciones, recogida de fondos para los presos y sus familias, etc., además de presentar en ayuntamientos y parlamentos numerosas mociones de condena a la dictadura chilena.

En cuanto a los partidos centristas, el CDS, creado por Adolfo Suárez, tuvo una actitud más decidida contra la dictadura de la que tuvo la extinta UCD, denunciando la venta de armas españolas a Chile, e incluso el propio Adolfo Suárez viajaría a Santiago en varias ocasiones para defender la transición a la democracia. Por su parte, el PDP tuvo una influencia menor, aunque su presidente Oscar Alzaga mantuvo importantes contactos con líderes de la Democracia Cristiana chilena. Estos partidos también colaboraron con la democratización de Chile a través de sus respectivas coordinadoras internacionales. Es el caso de la Internacional Demócrata Cristiana, a la que pertenecía el PDP, y la Internacional Liberal, a la que perteneció el CDS.

En lo que se refiere a la derechista Alianza Popular, su actitud frente al «caso chileno» fue bastante más ambigua. Formado por dirigentes salidos de las filas del franquismo, durante años





se negó a condenar la dictadura de Pinochet e incluso a suscribir campañas de apoyo a los represaliados, aduciendo el principio de «no injerencia» en los asuntos internos de otros países.<sup>51</sup> Esta actitud fue cambiando a partir de los ochenta, cuando su presidente Manuel Fraga condenó sin paliativos la dictadura pinochetista, aunque realizando un constante agravio comparativo con los casos de Nicaragua y Cuba.

También se apoyaría a los sindicatos chilenos, pues sobre todo a partir de 1983, cuando arrecien las protestas laborales, el movimiento sindical se convertirá en un puntal de la lucha por la democracia. Desde muy pronto los sindicatos españoles UGT, CCOO y CNT se solidarizaron con sus contrapartes chilenos y realizaron multitud de movilizaciones.<sup>52</sup> Tanto UGT como CCOO enviaron fondos para la organización de los sindicatos chilenos y ayuda a los sindicalistas presos, aunque también colaboraron de otras formas como por ejemplo financiando viajes de cuadros sindicales a España para asistir a cursos de formación. Esta ayuda se canalizó bien directamente, bien a través de las internacionales sindicales, como la CIOLS, a la que estaba afiliada la UGT.<sup>53</sup> También se organizarían los sindicalistas chilenos exiliados en España, constituyéndose en Madrid el llamado Comité Sindical Chile en España y la Comisión CUT-España.

Además de partidos y sindicatos, también las organizaciones no gubernamentales españolas realizaron una importante labor de apoyo a la democratización de Chile, sobre todo en el terreno de los derechos humanos, apoyando a sus homólogos chilenos, como la Vicaría de la Solidaridad, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el CODEPU, a las que prestaron apoyo financiero y logístico. Fue el caso de ONG como CIPIE, IEPALA, APDH, CEAR o CAUM.<sup>54</sup>

Los destinatarios de la ayuda fueron múltiples: los partidos políticos, los sindicatos, las

ONG solidarias, los medios de comunicación opositores, los centros de estudios independientes, los colectivos de exiliados, etc. Esta se utilizaba para mantener la actividad de dichas organizaciones —que por su situación de clandestinidad o semiclandestinidad tenían difícil el financiamiento—, para sostener a las familias de desaparecidos o encarcelados, para labores solidarias en las poblaciones, para realizar estudios sociales, para campañas de concienciación, etc.

### El apoyo español a las protestas ciudadanas en Chile

A causa de la crisis económica, en 1983 se convocaron en Chile las primeras Jornadas Nacionales de Protesta, a las que el gobierno va a responder con más represión, lo que sin duda incrementó la tensión en sus relaciones internacionales. Preocupado por su imagen externa, el régimen comenzó a entorpecer la labor de los periodistas españoles, con Pinochet acusándolos de incitar los disturbios<sup>55</sup> e incluso expulsándolos del país, como fue el caso del enviado especial de *El País* José L. Martín Prieto. Como protesta, los enviados especiales españoles entregaron una nota expresando su solidaridad con su compañero.<sup>56</sup> También el gobierno español se quejó oficialmente por la expulsión del periodista.<sup>57</sup>

La sociedad civil española reaccionó indignada ante el aumento de la represión, que a muchos recordaba la todavía reciente coerción desatada por el franquismo,<sup>58</sup> convocándose numerosas movilizaciones, que por primera vez se coordinaban con las que tenían lugar en Chile.<sup>59</sup> En mayo y junio se registraron ocupaciones en los consulados chilenos de varias ciudades españolas.<sup>60</sup> El 13 de junio, los representantes en Madrid de los partidos opositores chilenos emitieron un comunicado conjunto en el que convocaban un acto solidario en la Plaza de España de Madrid.<sup>61</sup>







En junio, el cantautor Joan Manuel Serrat quiso recalar en Chile en el marco de su gira latinoamericana; sin embargo, el gobierno militar prohibió su ingreso en el país, aduciendo unas declaraciones contra el régimen realizadas días antes.<sup>62</sup> El día 26 el embajador Solano presentó ante el Ministerio de Exteriores chileno una protesta verbal por dicha prohibición.<sup>63</sup>

Aún no apagada esta polémica, el 9 de julio serían detenidos en Santiago varios dirigentes democristianos; el 12 de julio el PDP, apoyado por el resto de grupos, presentó en el Congreso de los Diputados una declaración oficial de protesta, que finalmente logró su liberación.<sup>64</sup> El gobierno español también exigiría la libertad de los sindicalistas encarcelados por su participación en las jornadas de protesta.<sup>65</sup> El 16 de agosto, el ministro español de Asuntos Exteriores convocaría al embajador de Chile en Madrid para expresarle la «profunda preocupación» del Gobierno por la situación en el país.<sup>66</sup>

En este contexto, para el día 11 de septiembre, aniversario del décimo aniversario del golpe militar, se convocarían en toda España concentraciones de protesta, que fueron apoyadas por el gobierno. Estas fueron especialmente intensas en Madrid, donde tuvo lugar una multitudinaria manifestación en la que participaron unas 200.000 personas y contó con la presencia de todos los partidos políticos parlamentarios (salvo AP) y sindicatos. Al frente de la misma marchaba el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien realizó varias declaraciones en las que calificaba a Salvador Allende como «el único presidente legítimo de Chile», y condenaba la «injustificable y monstruosa represión» ejercida por el régimen.<sup>67</sup>

Estas declaraciones causaron malestar en el gobierno chileno, quien al día siguiente convocó al embajador español para entregarle una nota de protesta por las «inaceptables» declaraciones de Guerra y su «intromisión en asuntos internos chilenos».<sup>68</sup> En noviembre se registró

otra protesta, en este caso contra el presidente González, por haber escrito una carta al presidente de turno de la CEE, Andreas Papandreu, donde se pedía a dicho organismo que se implicase en la democratización de Chile.<sup>69</sup> Estas protestas oficiales marcaron el inicio de un periodo de difíciles relaciones entre ambos países, que no concluiría hasta el regreso de la democracia al país andino.

Sin embargo, dichos choques no fueron óbice para que a finales de año la ex ministra Mónica Madariaga visitase Madrid. Embarcada en una gira europea para «explicar la realidad de Chile», Madariaga fue ignorada por las cancillerías del viejo continente; solo sería recibida en España, donde Felipe González la atendió únicamente a título personal porque en 1977 le había ayudado en la misión de liberar a Erich Schnake.<sup>70</sup>

El deterioro de las relaciones continuó durante los años siguientes, a lo que contribuyó sin duda el endurecimiento de las medidas represivas por parte del gobierno militar, que culminaron en el establecimiento del estado de sitio en noviembre de 1984, lo que provocó nuevamente el malestar del gobierno español, que llegó a presentar su disconformidad con la medida tanto en la representación chilena en Madrid como en Santiago.<sup>71</sup> Además, hizo pública una declaración en la que mostraba su «preocupación» por los últimos acontecimientos que se están produciendo en el país.<sup>72</sup>

En este ambiente enrarecido, ese mes se produjo la expulsión de Chile del jesuita español Ignacio Gutiérrez, a la sazón Vicario de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Gutiérrez, muy crítico con las atrocidades de la dictadura, recientemente había viajado a Europa para iniciar una campaña con objeto de recabar fondos para la Vicaría, formulando críticas que la dictadura consideró «graves», tras de lo cual no se le permitió el reingreso al país.<sup>73</sup> Este suceso fue calificado como una abierta provoca-





ción al Gobierno de España,<sup>74</sup> quien en boca de su embajador protestó «enérgicamente» ante el gobierno chileno.<sup>75</sup>

El 11 de septiembre de 1984, undécimo aniversario del golpe de estado, representantes de PSOE, AP, PDP, CDS y los comunistas participaron en una jornada de solidaridad con el pueblo chileno, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos.<sup>76</sup> Asimismo, el PSOE convocaría para el 13 de septiembre un gran acto de apoyo a Chile, el que participarían representantes de todos los partidos y sindicatos. Por su parte, varios partidos de izquierdas llamaron a una protesta para la tarde del 11 ante la embajada chilena.<sup>77</sup>

La escalada de la tensión continuó durante el año siguiente. En junio, el embajador español protestó por la detención de una hija del agregado laboral de la Embajada de España y exigió al gobierno militar que presentara excusas.<sup>78</sup> El 25 de agosto, once fuerzas políticas pertenecientes derecha, el centro y la izquierda no marxista firmaban en Chile un «Acuerdo Para la Transición a la Plena Democracia». El Acuerdo recibió el apoyo de la CEE por medio de un Comunicado emitido el 9 de septiembre, al que se adhirió España. El 11 de septiembre, la oposición chilena llevó a cabo un gran acto unitario en Madrid, en el que convocaban «a todos los partidos democráticos de España, sin exclusiones» a «un compromiso amplio y operativo con el pueblo de Chile».<sup>79</sup>

#### Las visitas de opositores chilenos a España

Durante estos años se multiplicaron las visitas a España de miembros de la oposición democrática chilena en busca de ayuda económica o apoyo político, según puede comprobarse en el AFPI. Ya a finales de diciembre de 1982, escasas semanas después de la toma de posesión de Felipe González, se celebró un encuentro entre socialistas chilenos y españoles, para analizar la nueva situación política.<sup>80</sup>

En marzo de 1983 se celebró un encuentro entre las juventudes socialistas de España y las del Partido Radical de Chile, quienes publicaron un comunicado conjunto.<sup>81</sup> Ese mismo mes, delegados del PSOE y de los socialistas chilenos se reunieron en Madrid, donde estos últimos destacaron que «No hay duda de que la gestión socialista de una España democrática tiene una honda repercusión para los pueblos latinoamericanos y tal vez con más énfasis para el pueblo de Chile».<sup>82</sup> En abril y mayo el exdiputado radical Camilo Salvo, exiliado en España, se reunió con Elena Flores para solicitar la ayuda económica del PSOE para un proyecto de investigación y el arriendo de una oficina.<sup>83</sup> En septiembre Armando Arancibia, director del Centro de Estudios VECTOR, solicitó a Elena Flores ayuda para el mantenimiento de las actividades de su organización.<sup>84</sup> Finalmente, el gobierno español apoyó a VECTOR a través de convenios de cooperación con el ICI.<sup>85</sup>

También se produjeron visitas de sindicalistas para materializar algún tipo de colaboración. En junio de 1983 llegaron Julio Arias y Humberto Moyano, miembros del Comité Sindical Chileno, quienes solicitaron ayuda española por si la situación en Chile «se endurece más».<sup>86</sup> En diciembre, el líder sindical Rodolfo Seguel fue recibido al más alto nivel por Felipe González y por el secretario general de la UGT,<sup>87</sup> a quienes pediría apoyo para las movilizaciones de los trabajadores chilenos e incluso el «bloqueo económico y político del régimen».<sup>88</sup>

En enero de 1984, España firmó con el Alto Comisariado de la ONU para los refugiados un Convenio de cooperación para facilitar el retorno a su país de los exiliados chilenos y argentinos, dotado con 1.500 millones de pesetas. Las ayudas se destinarían a gastos de traslado, asentamiento laboral, reinstalación profesional, servicios de asistencia sanitaria y ayudas de emergencia para manutención familiar.<sup>89</sup> Por esos mismos días, el Centro de Estudios para





el desarrollo, la UGT y la Fundación Presidente Salvador Allende presentaron un proyecto destinado a organizar en Chile un Instituto de Relaciones Laborales, que funcionaría como una escuela de cuadros, para el que solicitaban un financiamiento anual de 50.000 a 60.000 dólares por cinco años.<sup>90</sup> En abril Gonzalo Taborga Molina, Secretario de Relaciones Internacionales de la Comisión chilena de Derechos Humanos, visitó España con el fin de encontrar financiamiento para el periódico «Fortín Mapocho», un diario muy crítico con el régimen. Los socialistas españoles denegaron la ayuda por encontrarse dicho diario «muy cerca de los comunistas», aunque se plantearon futuros subsidios a la revista *Apsi*,<sup>91</sup> considerada más en la línea del PSOE.

Como decíamos, la preocupación por las divisiones en el Partido Socialista de Chile era constante, por lo que fueron también frecuentes los viajes de socialistas chilenos a Madrid para tratar este tema. Por ejemplo, en julio de 1984 llegaron Aniceto Rodríguez y Alejandro Giliberto para solicitar al PSOE que convenciera a los distintos sectores enfrentados a que realizaran un esfuerzo para superar la situación.<sup>92</sup> En febrero de 1985 se produjo otra reunión entre miembros del PSOE y de distintas tendencias para lograr un acercamiento.<sup>93</sup>

El 3 de enero de 1985, fuerzas del CNI allanaron en Santiago la sede de VECTOR, deteniendo a su director y a varios de sus colaboradores. Alejandro Giliberto se dirigió al PSOE para que intercediera por los detenidos.<sup>94</sup> El 25 de abril, el socialista Clodomiro Almeyda se reunió con Elena Flores, a quien informó sobre la situación en Chile, y propuso celebrar en septiembre una reunión en Barcelona del Comité de Investigación de Crímenes de la Junta Militar Chilena.<sup>95</sup> El 29 de octubre, el socialista Darío Pavés solicitó ayuda económica del PSOE para una publicación y para unos pasajes de avión.<sup>96</sup> A finales de año los socialistas Hernán Vodano-

vic, Darío Pavés y Erick Schnacke, se entrevistaron con el PSOE para informarles sobre la situación chilena y realizar algunas peticiones, como que radio Exterior de España apoyara con su programación la democratización de Chile.<sup>97</sup>

Estas visitas de disidentes chilenos a España en busca de apoyo continuaron e incluso se intensificaron en 1986, al que la oposición proclamó el «año decisivo» para el definitivo derrocamiento del régimen militar, como veremos a continuación.

### El «Año decisivo»

Este año, la perspectiva de hacer caer rápidamente la dictadura originó una intensa movilización, como por ejemplo las jornadas de protesta nacional del 2 y 3 de julio de 1986, que tuvo como consecuencia, al igual que en ocasiones anteriores, una respuesta gubernamental fuertemente represiva.<sup>98</sup>

Chile se convirtió este año en un foco de atención constante por parte de la opinión pública española, y partidos, sindicatos y asociaciones redoblaron su trabajo de solidaridad con la oposición chilena. Una prueba de ello es que este año se multiplican los informes sobre la situación chilena depositados en el AFPI.<sup>99</sup>

Paralelamente, el gobierno español siguió trabajando a través de su legación diplomática para tratar de suavizar la represión y ayudar a la oposición, concienciando a la población española a través de los medios de comunicación estatales y presentando mociones parlamentarias de condena contra las violaciones de derechos humanos ejercida por el régimen chileno. La reciente entrada de España en la CEE amplió las posibilidades en este sentido, y permitió a los eurodiputados españoles presentar mociones de condena en el Parlamento Europeo, donde tendrían una mayor resonancia y elevaría la presión sobre el régimen. También se redobla-





ron las misiones de delegaciones de la CEE a Chile, donde comprobaban *in situ* la situación del país y podían entrevistarse con disidentes, como una que viajó al país en mayo, en la que participaron europarlamentarios españoles, y que consiguió la libertad de dos miembros de la Vicaría de la Solidaridad recientemente encarcelados.<sup>100</sup>

Ese año se incrementaron las visitas de políticos españoles a Chile. Entre el 9 y el 13 de enero estuvo una delegación de las Cortes, compuesta por representantes de PSOE, AP, PNV y CIU. Durante su estancia, se entrevistaron con representantes de la Iglesia, de la Alianza Democrática, del Comando Nacional de Trabajadores, del Colegio de Periodistas, de organizaciones estudiantiles y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, aunque también con representantes del régimen.<sup>101</sup> En mayo, diversos representantes políticos españoles acudieron a Santiago para participar en la Asamblea Parlamentaria Internacional por la Democracia en Chile, a la que asistirían diputados y senadores de doce países. Aunque el régimen autorizó dicho encuentro, lo calificó de «injerencia» y desde el principio mostró gran hostilidad hacia los delegados. La policía acordonó el hotel donde se celebró el acto, disolviendo violentamente a un grupo de manifestantes que trató de acceder a él.<sup>102</sup> En octubre llegaría una delegación de la IS, quien se entrevistó con miembros de la oposición y visitó varias poblaciones.<sup>103</sup> En noviembre Joaquín Leguina se reuniría con políticos opositores y dictó una conferencia,<sup>104</sup> y a finales de ese año, sería Adolfo Suárez quien acudiría a Chile para participar en las jornadas «Consenso y transición: la experiencia de España», en las que políticos chilenos y españoles abogaron por seguir el ejemplo español para lograr la democracia.

También aumentaron las visitas en sentido contrario. En marzo llegó Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende; en mayo, Milenko Zlosi-

lo solicitó ayuda económica para diversos proyectos, como cursos de formación de cuadros sindicales y para la revista *Apsi*, sugiriendo que el Banco Exterior de España e Iberia insertaran publicidad en la misma. Además, buscó mediación para establecer contactos entre empresarios españoles y chilenos.<sup>105</sup> Ese mismo mes, fueron representantes del MAPU los que se pusieron en contacto con Elena Flores para «profundizar relaciones».<sup>106</sup> En julio, representantes diplomáticos españoles invitaron a Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, joven opositor asesinado por militares, a visitar España.<sup>107</sup> En noviembre aterrizó Ricardo Núñez, quien se entrevistó con Felipe González y Alfonso Guerra.

La política de aislamiento a la que quiso someterse al régimen pinochetista quedó patente en decisiones como la que tomó la dirección de TVE en julio de no participar en el festival de la canción de la OTI, que ese año se celebraba en Chile, aduciendo para ello «razones obvias»<sup>108</sup>. El propio director del ente incluso hizo un llamamiento a los países miembros de la OTI para que siguiesen su ejemplo.<sup>109</sup>

En este contexto, un asunto embarazoso vino a cuestionar la estrategia del gobierno socialista respecto a la democratización de Chile: en mayo, el sindicalista Rodolfo Seguel fue entrevistado por *Diario 16*, a través de cuyas páginas denunció que a pesar de sus reiteradas condenas a la violación de los derechos humanos que se estaban produciendo en el país, España estaba vendiendo armas a Chile.

El país andino era uno de los principales clientes del armamento español. La mitad de los aviones militares fabricados en España y vendidos en Latinoamérica prestaban servicio en la defensa nacional chilena; solo en 1982, se firmaron entre los dos países contratos por valor de 80 millones de dólares, y hasta 1984, Chile representó casi el 20% de las exportaciones bélicas totales españolas.<sup>110</sup> El material





vendido incluía aviones de combate, lanchas, camiones, armas, municiones y, lo que resultó más polémico, material antidisturbios, contra- to este último que se firmó precisamente en 1986, año en el que en España arreciaron las manifestaciones contra la dictadura.

Como puede suponerse, todo esto generó una importante polémica entre la opinión pública, lo que obligó al gobierno a ofrecer explicaciones. Tanto González como sus ministros adujeron que las ventas se estaban realizando en virtud a contratos firmados durante la etapa de UCD, y que estas cesarían en cuanto vencieran dichos convenios.<sup>111</sup> Estas explicaciones no convencieron a todos, y así, desde varios ámbitos surgieron iniciativas para impedir que Pinochet siguiera recibiendo armamento español. En mayo, el eurodiputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés presentó una enmienda solicitando un embargo de armas y material antidisturbios al Gobierno chileno.<sup>112</sup> Finalmente el Ministro de Asuntos Exteriores anunció ante las Cortes que la venta de armas sería prohibida a partir de agosto de 1986.<sup>113</sup> A pesar de los intentos de rectificación, este asunto provocó un enfriamiento de las relaciones entre la oposición chilena y el gobierno socialista español, brecha que se agrandaría cuando ese mismo año el gobierno de González votó afirmativamente en el Banco Mundial para la entrega de créditos al Régimen Militar.<sup>114</sup>

### El espionaje a la embajada de España

En agosto, un grave suceso contribuiría a que 1986 marcara posiblemente el punto más bajo en las relaciones diplomáticas entre España y Chile: a mediados de mes, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que la Embajada española en Santiago había sido objeto de espionaje por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de los servicios chilenos de información. Desde hacía tiempo la legación española, a la que medios periodísti-

cos chilenos consideran entre las cinco mejor informadas de Santiago,<sup>115</sup> despertaba un malestar especial entre las autoridades chilenas, debido a los contactos que allí mantenían diplomáticos españoles con líderes opositores, lo que pudo precipitar la decisión de vigilarla estrechamente.

A pesar de que desde Madrid se aseguró que la información sustraída se componía únicamente de «documentos sin interés», Exteriores reforzó el dispositivo de seguridad de la embajada y el 19 de agosto se ordenó al embajador que se entrevistara con Jaime del Valle, jefe de la diplomacia chilena, para pedirle explicaciones por lo sucedido.<sup>116</sup> Del valle prometió hacer «averiguaciones», que finalmente no condujeron a nada.<sup>117</sup> Inocencio Arias, director de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Exteriores, calificó el incidente como algo «desagradable y deplorable» que exigía una valoración meticulosa por parte del Gobierno,<sup>118</sup> y el 2 de septiembre se anunció que el embajador Solano sería llamado a Madrid para evacuar consultas.<sup>119</sup>

Sin embargo, el 7 septiembre un suceso de gran magnitud desplazó este asunto a un segundo plano: ese día, un comando perpetró un intento de magnicidio contra Pinochet. Como represalia, el régimen endureció la represión, que se saldó con varios asesinatos extrajudiciales de disidentes y la detención del líder socialista Ricardo Lagos, además del cierre de varias revistas de la oposición y amenazas a corresponsales españoles,<sup>120</sup> llegándose a expulsar del país a Carlos Brodac, informante de *Diario 16*.

El gobierno español trató el asunto con suma prudencia, seguramente para no caldear aún más los ánimos. El ministro de Cultura Javier Solana realizó unas declaraciones en las que afirmaba que el ejecutivo rechazaba la violencia y seguía «con profunda preocupación» las medidas de excepción tras el atentado, calificándolas de «nuevo obstáculo» para alcanzar





la democracia,<sup>121</sup> aunque «Txiki» Benegas descartaría más tarde la adopción de represalias.<sup>122</sup> La respuesta de la sociedad civil española fue más contundente. Varios partidos de centro e de izquierda condenaron el establecimiento del estado de sitio en Chile, y se realizaron manifestaciones de protesta ante los consulados chilenos en Madrid y Barcelona.<sup>123</sup>

Mientras, la diplomacia española en Santiago comenzaba a movilizarse para tratar de mitigar, en la medida de lo posible, la represión. Miguel Solano se interesó por la suerte de los detenidos; protestó por la expulsión de Carlos Brodax e intercedió a favor de Ricardo Lagos ante el ministro del interior, advirtiéndole que la detención tendría un alto costo internacional,<sup>124</sup> logrando que finalmente fuera liberado.

El atentado contra Pinochet, las intensas movilizaciones de la oposición y la dura respuesta del régimen, las recientes revelaciones sobre venta de armas a Chile y el caso del espionaje en la embajada, hechos de los que los medios de comunicación españoles informaron profusamente, hicieron que el país andino fuera un tema de permanente actualidad, y que durante aquellos meses la opinión pública española estuviera concienciada al máximo en este asunto.

No era, pues, de extrañar que, en septiembre, coincidiendo con el decimotercer aniversario del golpe de Estado, se multiplicaran los actos de conmemoración por toda España. A principios de mes se celebró una jornada de apoyo a la oposición chilena, en la que participaron el alcalde de Madrid y el Defensor del Pueblo.<sup>125</sup> Para el domingo 14 todos los partidos políticos con representación parlamentaria convocarían una gran manifestación en Madrid, bajo el lema «Libertad para Chile». A ella acudieron unas 300.000 personas, y terminó con la lectura de un comunicado consensuado por todos los convocantes, en el que se calificaba al régimen del general Augusto Pinochet como «una de las dictaduras más salvajes de este si-

glo»,<sup>126</sup> tras lo cual Alfonso Guerra, como tres años antes, realizó a la prensa duras declaraciones contra el régimen de Pinochet. Esta multitudinaria manifestación, directamente alentada por el gobierno español, tal vez supuso, según *El País*, el «golpe de gracia» a unas muy deterioradas relaciones entre los dos países. El propio embajador Solano reconoció que tras ella su capacidad de diálogo con el régimen se había limitado «notablemente».<sup>127</sup>

En esos meses difíciles, la oposición chilena recibió otro espaldarazo desde España a través de la concesión del Premio Príncipe de Asturias a la Vicaría de la Solidaridad. El premio sería entregado en noviembre en la ciudad de Oviedo, hasta donde se desplazaría el cardenal Silva Henríquez, quien fue allí largamente ovacionado.<sup>128</sup> Más tarde el clérigo se dirigió a Barcelona, donde con motivo de su visita el Parlament de Catalunya aprobó una proposición no de ley en la que se pedía el retorno de la democracia a Chile.<sup>129</sup>

La manifestación de Madrid, el Príncipe de Asturias a la Vicaría de la Solidaridad, y los actos de Barcelona cerraban simbólicamente un año muy intenso en lo que a las relaciones hispano-chilenas se refería, y a la vez servían de prólogo a un cuatrienio no menos apasionante, marcado por el Plebiscito de 1988 y las primeras elecciones democráticas, que supondrían el fin de la dictadura de Pinochet y llevarían a La Moneda al primer presidente democráticamente elegido desde 1973.

### Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos visto cómo tras la victoria socialista en las elecciones generales de 1982 se produjeron cambios sustanciales en las relaciones entre España y Chile. Las abismales diferencias ideológicas de ambos regímenes y las reiteradas condenas del gobierno español hacia las violaciones de





derechos humanos por parte de la dictadura pinochetista hicieron que las relaciones diplomáticas entre los dos países alcanzaran un de los puntos más bajos de su historia, sobre todo cuando en agosto de 1986 se verificase el espionaje a la legación española en Santiago.

Sin embargo, y a pesar de los choques políticos, las relaciones económicas entre los dos países incluso aumentaron, a veces en ámbitos tan polémicos como la venta de armas, y por supuesto se intensificaron los contactos entre las sociedades civiles de ambos países. Identificadas por lazos culturales seculares y por experiencias históricas similares, los españoles mostraron desde el principio una gran solidaridad con el pueblo chileno, que se tradujo en múltiples campañas solidarias. Partidos políticos, sindicatos y ONG's protagonizaron numerosas muestras de apoyo a la oposición democrática chilena. También fueron frecuentes tanto los viajes de personalidades españolas a Chile como de opositores chilenos a España, lo que contribuyó a aumentar el flujo de información y recursos entre los dos países.

Esta solidaridad se intensificó durante el año 1986, en el que en el país andino se multiplicaron las movilizaciones contra el régimen, quien por toda respuesta aumentó la represión. Esto a su vez provocó una fuerte repulsa por parte de los partidos y la sociedad civil española, como se demostraría en las manifestaciones convocadas en España durante ese año.

La solidaridad española sería determinante no solo para reorganizar a una oposición chilena muy castigada por la represión estatal, sino también para su reorientación ideológica y estratégica con vistas a la preparación de la futura transición a la democracia. La ayuda del PSOE primó a aquellos grupos más moderados, cercanos a la socialdemocracia de estilo europeo y partidarios de una ruptura pactada según el «modelo español», marginando a los sectores más radicales y partidarios de una salida ruptu-

rista y violenta. Como vemos, esta solidaridad no fue del todo desinteresada.

#### FUENTES

Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.  
Diarios *El País*, *ABC*, *La Vanguardia*.

#### BIBLIOGRAFÍA

- AEDO VÁSQUEZ, Sergio Andrés, *España y Chile: articulación de una historia antidemocrática en el siglo XX. Refundación de las bases del estado nacional durante el franquismo y el pinochetismo*. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura, 2015.
- ANGELL, Alan, «Las dimensiones internacionales del golpe de estado chileno», *Política, Revista de Ciencia Política*, Vol. 51, n.º 2, 2013, pp. 57-78.
- AVARIA, Diego, «La vuelta a la democracia en Chile: La contribución de los exiliados», *Aletheia*, Vol. 5, n.º 10, 2015, pp. 1-16.
- CARRELLÁN, Juan Luis (ed.), *La Guerra Civil Española: Estudios y reflexiones desde Chile*, Bicentenario, Santiago de Chile, 2018.
- CAVALLO, Ascanio; SALAZAR, Manuel y SEPÚLVEDA, Oscar, *La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988*, Uqbar, Santiago de Chile, 2008.
- FERNÁNDEZ, Joaquín; GÓNGORA, Álvaro y ARANCIBIA, Patricia: *Ricardo Núñez. Trayectoria de un socialista de nuestros tiempos*, Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, 2013.
- GALLARDO, Francisco, «Apuntes para una historia de la solidaridad de España con Chile: el año 1978», *Solidaridad Internacional con Chile durante la dictadura cívico-militar*. Edición electrónica en <http://solidaridadconchile.org/?p=432> [Consultado 16/12/2019].
- GARCÍA GUTIÉRREZ, Cristina Luz, «Exportando la democracia: la implicación española en el plebiscito chileno de 1988», *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, 19, 1, 2015, pp. 63-83.
- «Las relaciones de España con la dictadura chilena», en AZCONA, José Manuel (ed.), *Emigración y relaciones bilaterales España-Chile 1810-2015*, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 205-230.
- HENRÍQUEZ, María José, «Política exterior, desarrollismo y neoliberalismo. España como espacio



- de sustitución para Chile, 1964-1989» en FIGALLO, Beatriz (Ed.), *Desarrollismo, franquismo y neohispanidad. Historias conectadas entre España, América Latina y Argentina*, Teseo, Buenos Aires, 2018
- HUNEEUS, Carlos, *El régimen de Pinochet*, Sudamericana, Santiago de Chile, 2001.
- JARA, Isabel, *De franco a Pinochet: El proyecto cultural franquista en Chile, 1936-1980*. Ediciones Departamento de Teoría de las Artes, Santiago de Chile, 2007.
- LAGOS, Ricardo, *Así lo vivimos. La vía chilena a la democracia*. Taurus, Santiago de Chile, 2012.
- LASAGNA, Marcelo, «Las relaciones chileno-españolas: 1982-1989. Del primer Gobierno Socialista español al ocaso de la dictadura chilena», *Afers Internacionals*, 22, 1991, pp. 131-143.
- «La política iberoamericana de España de cara a los noventa: la relación con Chile 1982-1992». *Revista de ciencia política* Vol. 16, no. 1-2, 1994, pp. 67-94.
- LEMUS, Encarnación, *En Hamelin... La transición española más allá de la frontera*, Septem, Oviedo, 2001
- LINZ, Juan José, «La transición a la democracia en España en perspectiva comparada», en COTARELO, Ramón (Ed.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, CIS, Madrid, 1992, pp. 431-457.
- MADARIAGA, Mónica: *Testimonios. La verdad y la honestidad se pagan caro*, Edebé, Santiago de Chile, 2002.
- O'DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe y WHITEHEAD, Laurence: *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. 3, *Perspectivas comparadas*, Paidós, Buenos Aires, 1988.
- OLGUÍN, Mario, «Exilio político chileno en España (1973-1990/1994). El caso de Zaragoza. Acercamiento al estudio, avances y discusiones de la investigación» en FORCADELL, Carlos y FRÍAS, Carmen (eds.), *Veinte años de congresos de Historia Contemporánea (1997-2016)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2017, pp. 401-412.
- OPAZO, Héctor, *Los actores no gubernamentales españoles ante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990): apoyo a la democratización y defensa de los Derechos Humanos*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2009.
- OTANO, Rafael, *Nueva crónica de la transición*, LOM, Santiago de Chile, 2006.
- RUIZ GODOY, Patricio, «Hacia una «transición modelo»: influencia y significación de la transición española en la oposición chilena a la dictadura (1980-1987)», *Izquierdas*, 24, 2015, pp. 127-149. Ed. Electrónica en <http://izquierdas.revues.org/264>, [Consultado 16/12/2019].
- SOTILLOS, Eduardo, *1982, el año clave*, Aguilar, Madrid, 2002.
- SOTO CARMONA, Álvaro, «Violencia política y transiciones a la democracia. Chile y España» en COMPAGNON, Oliver (ed.), *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX*, Casa de Velázquez, Madrid, 2009, pp. 113-127.
- WAISMAN, Carlos; REIN, Raanan y GURRUTXAGA, Ander (Eds.), *Transiciones de la dictadura a la democracia: los casos de España y América Latina*, Ediciones Universidad del País Vasco, Leioa, 2005.
- WHITEHEAD, Laurence, «Aspectos internacionales de la democratización» en O'DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe y WHITEHEAD Laurence, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Vol. 3, *Perspectivas comparadas*, Paidós, Buenos Aires, 1988, pp. 15-78.

## NOTAS

- <sup>1</sup> Huneeus, 2001.
- <sup>2</sup> Linz, 1992, pp. 431-457.
- <sup>3</sup> O'Donnell, Schmitter y Whitehead, 1988.
- <sup>4</sup> Henríquez, 2018.
- <sup>5</sup> Jara, 2007.
- <sup>6</sup> Waisman, 2005.
- <sup>7</sup> Lemus, 2001.
- <sup>8</sup> Lasagna, 1991, pp. 131-143.
- <sup>9</sup> Soto Carmona, 2009, pp. 113-127.
- <sup>10</sup> Ruiz Godoy, 2015, pp. 127-149.
- <sup>11</sup> García Gutiérrez, 2015, pp. 63-68.
- <sup>12</sup> Carrellán, 2018.
- <sup>13</sup> Opazo, 2009.
- <sup>14</sup> Sotillos, 2002.
- <sup>15</sup> Whitehead, 1988, pp. 15-78.
- <sup>16</sup> Lasagna, 1994, p. 77.
- <sup>17</sup> García Gutiérrez, 2016, p. 226.
- <sup>18</sup> García Gutiérrez, 2016, p. 225.
- <sup>19</sup> Ruiz Godoy, 2015, pp. 140-141.
- <sup>20</sup> *El País*, 4-6-1983.
- <sup>21</sup> ABC (Madrid), 13-10-1985, p. 2.
- <sup>22</sup> Ruiz Godoy, 2015, p. 145.





- 23 Lagos, 2012, p. 83.
- 24 Ruiz Godoy, 2015, pp. 134-138.
- 25 Madariaga, 2002, pp. 159-160.
- 26 Lasagna, 1994, pp. 68, 73-75.
- 27 Whitehead, 1988, p. 55.
- 28 Lasagna, 1991, p. 136.
- 29 Henríquez, 2018, p. 438.
- 30 Henríquez pp. 438-439.
- 31 Por ejemplo, *El País*, 16-11-1984; *ABC* (Madrid), 03-02-1985 (p. 14) y el 07-06-1985 (p. 18); *La Vanguardia* el 29-08-1985 (p. 5) y el 23-01-1986 (p. 6)
- 32 Henríquez, 2018, p. 417.
- 33 Aedo Vásquez, 2015, p. 368.
- 34 Lasagna, 1991, p. 141.
- 35 *ABC* (Madrid), 16-07-1986, p. 60.
- 36 García Gutiérrez, 2016, p. 222.
- 37 Lasagna, 1991, pp. 138-139.
- 38 Avaria, 2015, pp. 5-6.
- 39 Lagos, 2012, p. 136.
- 40 AFPI, Caja 79-F.
- 41 Olguín, 2017, p. 402.
- 42 Fernández, 2013, p. 182.
- 43 Olguín, 2017, p. 402.
- 44 Angell, 2013, pp. 64, 67.
- 45 Gallardo.
- 46 AFPI, Caja 67-G.
- 47 Opazo, 2009, pp. 146, 148, 247.
- 48 AFPI, Caja 112-A.
- 49 Otano, 2006, p. 298.
- 50 Opazo, 2009, pp. 251-255.
- 51 Opazo, 2009, pp. 257-259.
- 52 Opazo, 2009, p. 293.
- 53 Opazo, 2009, pp. 300, 309.
- 54 Opazo, 2009, pp. 340-347.
- 55 *El País*, 22-05-1983.
- 56 *El País*, 11-09-1983.
- 57 *El País*, 14-09-1983.
- 58 *El País*, 19-08-1983.
- 59 García Gutiérrez, 2016, p. 226.
- 60 *El País*, 21-05-1983.
- 61 *El País*, 14-06-1983.
- 62 *El País*, 03-06-1983.
- 63 *La Vanguardia*, 27-06-1983, p. 31.
- 64 *La Vanguardia*, 25-07-1983, p. 8.
- 65 Lasagna, 1991, p. 137.
- 66 *El País* 17-08-1983.
- 67 *El País*, 12-09-1983.
- 68 *El País*, 14-09-1983.
- 69 *El País*, 18-11-1983.
- 70 Cavallo, 2008, p. 481.
- 71 Lasagna, 1994, p. 78.
- 72 *ABC* (Madrid), 16-11-1984.
- 73 *El País*, 17-11-1984.
- 74 Lasagna, 1991, pp. 131-143.
- 75 *ABC* (Madrid), 08-11-1984, p. 20.
- 76 *ABC* (Madrid), 12-09-1984.
- 77 *El País*, 12-09-1984.
- 78 *ABC* (Madrid) 06-06-1985, p. 11.
- 79 AFPI, Caja 309-F-53.
- 80 AFPI, Caja 67-G.
- 81 AFPI, Caja 80-B.
- 82 AFPI, Caja 67-G.
- 83 AFPI, Caja 67-G.
- 84 AFPI, Caja 112-A.
- 85 AFPI, Caja 79-F.
- 86 AFPI, Caja 67-G.
- 87 *El País* 06-12-1983.
- 88 AFPI, Caja 67-G.
- 89 *ABC* (Madrid), 01-02-1984.
- 90 AFPI, Caja 67-G.
- 91 AFPI, Caja 67-G.
- 92 AFPI, Caja 309-F-54.
- 93 AFPI, Caja 309-F-54.
- 94 AFPI, Caja 79-F.
- 95 AFPI, Caja 309-F-54.
- 96 AFPI, Caja 309-F-54.
- 97 AFPI, Caja 309-F-54..
- 98 Lasagna, 1991, p. 137
- 99 AFPI, Caja 80-B.
- 100 *ABC* (Sevilla), 09-08-1986, p. 20.
- 101 AFPI, Caja 111-H y Caja 309-F-53.
- 102 *El País*, 22-05-1986.
- 103 AFPI, Caja 110-E.
- 104 AFPI, Caja 85-D.
- 105 AFPI, Caja 309-F-54.
- 106 AFPI, Caja 309-F-53.
- 107 AFPI, aja 112-A.
- 108 *La Vanguardia*, 18-07-1986, p. 48.
- 109 *ABC* (Madrid), 19-07-1986, p. 63.
- 110 *El País*, 12-04-1987.
- 111 Lasagna, 1991, p. 137; *El País*, 24-05-1987; *La Vanguardia*, 15-09-1986, p. 9.
- 112 *El País* 16/5/1986.
- 113 Diario de Sesiones del Congreso, n.º 55, III Legislatura, 22 de diciembre de 1986, p. 2217.





## MISCELÁNEA

Pedro Feria Vázquez

<sup>114</sup> Opazo, 2009, pp. 297-298.

<sup>115</sup> *El País*, 22-09-1986.

<sup>116</sup> ABC (Madrid), 21-08-1986, p. 18.

<sup>117</sup> Lasagna, 1991, p. 137.

<sup>118</sup> ABC (Madrid), 05-09-1986.

<sup>119</sup> *La Vanguardia*, 03-09-1986, p. 13.

<sup>120</sup> *El País*, 11-09-1986.

<sup>121</sup> *El País*, 11-09-1986.

<sup>122</sup> ABC (Madrid), 12-09-1986, p. 31.

<sup>123</sup> *El País*, 10-09-1986.

<sup>124</sup> AFPI, Caja 309-F-53.

<sup>125</sup> AFPI, Caja 79-F.

<sup>126</sup> *La Vanguardia*, 15-09-1986, p. 9.

<sup>127</sup> *El País*, 22-09-1986.

<sup>128</sup> *El País*, 23-11-1986.

<sup>129</sup> *La Vanguardia*, 28-11-1986, p. 22.

